

Nueva Sociedad Nro. 156 Julio-Agosto 1998, pp. 32-43

La violencia política en Nicaragua. Élites, bases sandinistas y contras en los 90

Salvador Martí

Salvador Martí: profesor del departamento de Ciencia Política y Derecho Público de la Universidad Autónoma de Barcelona y colaborador del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica - Inhca. Recientemente ha publicado *La revolución enredada. Nicaragua 1977-1996* y ha compilado junto con Ana Sofía Cardenal *América Central: Las democracias inciertas*.

Nota: El presente artículo es el resumen de un capítulo de su tesis doctoral: *Revoluciones, rebeliones y asonadas. Transformaciones sociales y violencia política en Nicaragua, 1961-1993*. Para la realización de este trabajo el autor agradece la colaboración académica del equipo del Inhca-UCA, el apoyo logístico de la que fue la CIAV-OEA y los comentarios siempre lúcidos y atentos de los compañeros Ricard Goma y Alejandro Bravo.

Palabras clave: guerra interna, violencia política, pacificación, Nicaragua.

Resumen:

Las promesas hechas a los combatientes nicaragüenses desmovilizados una vez acordada la pacificación, no se materializaron pese a que era un aspecto esencial del proceso democratizador. Y fue lo que activó el surgimiento de recontras y recompas, ya no como grupos políticos armados sino como contingentes de desesperados. Se puso así de manifiesto la irresponsabilidad política y moral de las élites del país. Sólo la unión de las víctimas y desprotegidos podrá moderar los efectos de las políticas en curso, regresivas pese a la retórica democrática.

A la hora de analizar el desarme y desmovilización de la Contrarrevolución –cuyo nombre entonces era el de Resistencia Nacional (RN)– cabe observar que a pesar de los múltiples acuerdos firmados por los presidentes centroamericanos, y por las comisiones de la RN y del gobierno sandinista, la RN permaneció íntegra e intacta en el interior de Nicaragua hasta el 23 de marzo de 1990. De esta forma, ésta mantuvo su integridad hasta que se conoció el desenlace electoral de 1990 e incluso después de que se firmara el Protocolo de Transición del Poder Ejecutivo (PTPE), entre una delegación del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y el grupo asesor de la presidenta electa Violeta Barrios de Chamorro. Finalmente, con la firma del llamado Acuerdo de Toncotín –por representantes de

la RN y del nuevo gobierno, y bajo el auspicio del cardenal Obando y Bravo– se rubricó el efectivo y definitivo cese al fuego; el compromiso era que la Contra desarmara sus tropas antes del 20 de abril de 1990; y que ésta se concentrara en las *zonas de seguridad* delimitadas previamente y vigiladas por organismos internacionales. Por su parte, el gobierno entrante se comprometía a amparar a las víctimas del conflicto y asegurar la rehabilitación y readaptación social de los desmovilizados.

Con todo, en los meses siguientes se encadenaron nuevos acuerdos y declaraciones entre ambas partes, firmándose así el «Acuerdo del cese al fuego efectivo y definitivo entre el gobierno de la República de Nicaragua y la Resistencia Nicaragüense» el 25 de abril; la «Declaración de Managua» el 4 de mayo; y el «Protocolo de Managua sobre el desarme» y el «Acuerdo para el establecimiento de polos de desarrollo» el 30 de mayo. El objetivo de dichos acuerdos era definir las condiciones de «seguridad» de los desalzados de la Contra, su ubicación y, sobre todo, la creación de los «instrumentos» para su integración social y económica, a saber, los llamados *polos de desarrollo*.

La laberíntica desmovilización de la Contra

Los *polos de desarrollo*, previamente localizados por el gobierno y la RN dentro de una extensión de 8.000 km² (situados, en su mayoría en la zona central del país), se concibieron como la solución a las demandas de tierra expresadas por parte de los combatientes y más tarde recogidas por los comandantes de campo. En el «Acuerdo para el establecimiento de polos de desarrollo» se asentó su definición y ubicación:

Entendemos por polos de desarrollo a una unidad de producción definida para beneficio de los miembros de la comunidad y del país que sirva como centro de servicios y de desarrollo de la región adyacente, por medio de proyectos individuales y/o colectivos. Los polos de desarrollo deben contar con las siguientes estructuras básicas: área municipal; escuelas, bodegas, servicios de agua potable, luz eléctrica, hospitales, calles, caminos; áreas de vivienda para los pobladores del polo; parcelas de propiedad privada para cultivos y ganadería de subsistencia; un área comunal y un área de proyectos para beneficio de todos los miembros de la comunidad. ... Los miembros de la RN que se desmovilicen y sus familiares tendrán derecho a ser beneficiados por los programas que se implementen en los polos de desarrollo delimitados al efecto.

A partir de entonces, los desalzados de la RN empezaron a concentrarse en nueve zonas de seguridad para hacer efectiva su desmovilización. Sin embargo, las cifras de desmovilizados y sus familiares superó toda previsión y, con ello, surgieron nuevas interrogantes sobre la capacidad de atender a las demandas de tierra y financiamiento de todos los desmovilizados, y si éstos tendrían que compartir los recursos con el resto de los afectados por el conflicto bélico, es decir, con los desmovilizados del Ejército Popular Sandinista (EPS) y del Ministerio del Interior (MINT), los repatriados y los desplazados. A la vez, también cabría preguntarse por la capacidad y la «voluntad política» del nuevo gobierno en cumplir los acuerdos suscritos y por el flujo (cada vez menor) de la ayuda económica –prometida por el gobierno de Estados Unidos antes de las elecciones

de febrero– para costearlos. Y más cuando en las zonas donde el gobierno ubicó los polos ya residían y trabajaban campesinos, precaristas, cooperativas y algunas (entonces) empresas estatales.

Así en un documento publicado por la Asociación Cívica de la Resistencia Nicaragüense (ACRN), se mencionaba que hasta 1991 se había recibido un total de 150.000 manzanas de tierra en unas 75 fincas ubicadas en vanos municipios de la región V y VI, llegando a atender apenas un 20% de la demanda total de las tierras. De esta forma se confirmó la temida tesis de que los polos de desarrollo sólo existían en el papel, empezándose a dudar del cumplimiento de las promesas realizadas por el gobierno recién electo. A consecuencia de dicho fenómeno, comenzó a manifestarse un complejo y conflictivo proceso del cual emergerían divergencias entre los desmovilizados de la RN y el gobierno; entre los primeros y los desmovilizados del EPS; y entre los cooperativistas y los desmovilizados de ambos ejércitos. Todo ello supondría la apertura de un nuevo capítulo de convulsión social en el campo.

Es en este contexto donde tienen que interpretarse ciertas declaraciones de miembros de la Contra donde se denunciaba la actitud del nuevo gobierno:

La Contra siempre fue una fuerza de presión de EEUU contra los sandinistas.... El apoyo de Washington terminó hace bastante tiempo y siempre estuvo condicionado. ... Ahora ya no interesamos y nos han abandonado, tanto EEUU como el gobierno. No esperamos nada de ellos.¹

El nuevo gobierno sólo representa a la oligarquía².

Nos fiamos de los acuerdos que firmamos con el gobierno, donde nos prometieron tierras, viviendas, medicinas, hospitales, centros de salud, escuelas, luz eléctrica y agua potable. Dijeron que trabajaríamos en las ciudadelas de los polos de desarrollo. Según los análisis que nosotros hacíamos, a estas alturas todo el mundo ya debería estar ubicado en su pedazo de tierra, haciendo su propia vida y avanzando en cuanto a la producción con prestamos sociales y todo eso. Pero no es así.³

Evidentemente, temprano se observó el incumplimiento de los acuerdos firmados. De esta manera, si bien la administración Chamorro se comprometió a la inmediata construcción de cuatro polos de desarrollo (El Almendro, Río Blanco, Yolaina y la zona del Río Coco) pronto los mismos responsables del Instituto de Reforma Agraria (INRA) declararon que «la realidad nos hizo comprender que estábamos equivocados». Pero no solo fue eso, sino que cuando los ex-miembros de la RN arribaron a dichos polos vieron que todas aquellas promesas hechas en su momento (la construcción de escuelas, centros de salud, puntos de agua...) nunca llegaban, así, los abandonaron en busca de su familia, de sus amigos, de su lugar natal o, simplemente regresaron a la montaña a buscar un *pedacito* de

¹ Declaración de Franklin, comandante de campo de la RN, en *Barricada Internacional* N° 318, 1990.

² *Ibíd.*

³ Extraído de una entrevista a Francisco García Rivera –*el Cuervo*– ex-combatiente contra, en Bendaña, p. 195.

tierra para trabajar o a ofrecerse como jornaleros en fincas ajenas. Así, tal como lo predijo Orlando Núñez a mediados de 1990⁴:

Al término de este ciclo agrícola tendremos un estallido en el campo más grande del que hemos tenido en toda la historia de Nicaragua. Los campesinos de la Contra no están vacunados contra el desempleo, contra los bajos salarios, contra la desertificación de las tierras, contra la falta de acceso a las tierras, contra las políticas de crédito y las tasas de interés, contra la diferencia entre los precios de la ciudad y del campo ... o sea, frente a todos los problemas que padece el campesinado nicaragüense.

De esta manera, el descontento en el campo estalló poco después de que los «potenciales usuarios» de los polos de desarrollo advirtieron que éstos eran, simplemente, una quimera. El descontento se canalizó a través de dos expresiones. Por un lado, el rearme de miembros que antes pertenecieron a la RN –surgiendo la Recontra– y, luego (en una dinámica de causa-efecto) el rearme de desmovilizados del EPS –los llamados ‘recompas’. Y por otro, la gestación –por parte de los diversos colectivos campesinos que anteriormente se enfrentaron en la guerra– de una conciencia común de compartir los mismos intereses y agravios.

En cuanto a la situación de los ex-contras, a mediados de julio de 1990 se realizó (conjuntamente con el gobierno, la RN, el EPS y delegados de diversos organismos internacionales) una evaluación de los acuerdos de desmovilización donde concluyeron que sólo se había cumplido y verificado el retiro de las tropas de la RN de sus antiguos cuarteles; pero que aún no se había terminado con la recolección de armamento; que la seguridad de los ex-miembros de la RN no podía garantizarse plenamente; que la función de reinserción social de los polos de desarrollo no era efectiva; y que la ayuda estatal prometida nunca había llegado. Así, si bien se certificó que existían 10.493 beneficiarios de parcelas de tierra (con una superficie de 370.912 manzanas), también se anotó que el 53% de los desmovilizados aún no tenían acceso a ellas (Cuadra/ Saldomando, pp. 11-13). Dicha evaluación mostró que el «proceso de reinserción» no tenía una base sólida y que el intento de pacificar el campo por la vía del desarme, de la cooptación de los cuadros de la Contra, y de la adjudicación de tierras sin una previa estrategia global con el resto de políticas implementadas por el nuevo gobierno, estaba destinado al fracaso.

En efecto, el impacto negativo de la política económica (que supuso una fuerte recesión, un incremento del desempleo, una disminución del crédito, y una reducción del circulante) dejó los acuerdos que pretendían integrar a los combatientes de ambos bandos sin una base donde sustentarse. Sobre ello, estudios posteriores concluyeron que la envergadura del problema derivado de la guerra nunca fue percibido en su totalidad –la dimensión masiva del fenómeno quedó de manifiesto al ver que 600.000 personas estaban directamente afectadas por el conflicto bélico y necesitaban ayuda de emergencia.

⁴ Extraído de una entrevista aparecida en *Crítica* N° 2/1990.

Entre ellos cabía considerar, por un lado, los 71.750 refugiados provenientes de Costa Rica y Honduras que optaron por la repatriación entre 1986 y 1993; los 22.413 desmovilizados de la RN y sus 58.721 familiares; los 72.000 desmovilizados del EPS (de los 96.000 miembros existentes antes de 1990) y 5.100 del antiguo MINT; y los 354.000 desplazados internos a causa de la guerra, mayoritariamente ubicados en las regiones del interior del país (Serra/Barry). En la misma dirección otro ejercicio revelaba la amplitud del problema afirmando que la cifra de desmovilizados era similar a la de los empleos formales existentes en Nicaragua: los desmovilizados de ambos bandos equivalían en 1991 a los tres sectores del empleo formal del país (Cuadra/Saldomando).

La ausencia de Estado, los recontras y los recompas

Paralelamente, a la vez que se desarrollaba la desmovilización de parte del EPS y de la totalidad de la RN, el gobierno de doña Violeta optó en la práctica por la desaparición de la institucionalidad del Estado en las zonas donde antes se había producido el conflicto. Con base en ello, como era de prever, el repliegue territorial del Estado impidió que existiera una regulación institucional adecuada acorde con la envergadura del problema, provocando –en la mayoría de casos– un vacío de poder en las zonas que habían sido el escenario de la guerra (en este sentido es gráfico el comentario que repetidamente me dirigían los colegas cada vez que anunciaba mi estancia en el país campesino: «vigila, porque en este *paisito* el Estado sólo llega hasta el cruce de Sébaco... Más allá es tierra de nadie»). Y en efecto, tal como se observó al poco tiempo de la toma de posesión de Violeta Chamorro, el gobierno se desentendió de la problemática del campo. En esa dirección, cuando en una entrevista preguntaron al cardenal Obando y Bravo si pensaba que doña Violeta se había olvidado de los desmovilizados de la Contra, respondió: «Olvidarse no creo... pero preocuparse, tampoco».

Fruto de todo ello, en octubre de 1990, 200 ex-contras tomaron el poblado norteño de Waslala, iniciando lo que poco más tarde se llamaría la Recontra. El deterioro de la situación continuó y, a partir de entonces empezó una escalada de violencia en el campo. Así, el 16 y 17 de noviembre del mismo año otro grupo de recontras tomó el puesto policial de la población de Jalapa. Así, a mediados de 1991 los conflictos armados se sucedieron, creando una espiral de violencia: en los tres años siguientes los enfrentamientos se cobraron más de un millar de víctimas producto de 700 acciones armadas.

Evidentemente, la situación fue en gran medida consecuencia de la falta de salidas al problema de la «reinserción» ya que ésta tuvo que darse en un contexto en extremo adverso –tanto en lo político como en lo social. Ello motivó que los cuadros intermedios de la RN –empujados por sus bases– se alzaran en armas contra el gobierno con el fin de presionarlo en pos del cumplimiento de las promesas acordadas. La primera formación de la recontra con una organización formalizada fue el llamado Frente Democrático de Salvación Nacional (FDSN), representado por un «Estado Mayor» de once personas que, durante la guerra contrarrevolucionaria, habían ocupado cuadros intermedios. Posteriormente se

crearían otros grupos, como el Frente Norte 3-80, dándose así un proceso de atomización de la actividad armada que, de manera progresiva, recordaba un fenómeno más cercano al bandidaje que a la lucha político-militar.

Pero, como era de esperarse, el rearme de ex-contras causó temor entre los miembros de las cooperativas –en su mayoría de adscripción sandinista– y a los desmovilizados del EPS y del MINT en las regiones I, V y VI, y éstos –como mecanismo de protección– retomaron las armas creando el colectivo que se conocería como los ‘recompas’. Así, en un primer momento, los recompas se organizaron en torno al Movimiento de Autodefensa Nacional (MADN); posteriormente tomarían notable relevancia la organización Frente Obrero y Campesino (FROC) y el Frente Unido Andrés Castro (FUAC), que actuarían por las zonas norteñas de Nueva Segovia y Zelaya hasta su reciente desmovilización (diciembre de 1997).

El resultado de esta dinámica fue que, a mediados de 1992, el Ejército –en su balance semestral– estimó que el número de rearmados era, entre recontras y recompas, de 21.905. Los nuevos contingentes de rearmados llegaron a disponer de 13.980 fusiles automáticos y otro tipo de armamento como ametralladoras, minas, misiles antiaéreos y antiblindados. Todo este material había estado almacenado en *buzones* antes del «desarme oficial» realizado por la Comisión Internacional de Apoyo y Verificación de la Organización de Estados Americanos (CIAV-OEA) y la Misión de Naciones Unidas para Centroamérica (Onuca). Tal como comentaron los rearmados con quienes hablé en la comarca de La Patriota (Matiguás) los ex-combatientes sólo entregaron a las organizaciones competentes el material en desuso, y lo rubricaron de la siguiente forma: «Con lo del desarme dimos los fusiles *descachimbados*... Hicimos sólo *la mueca*». De esta forma, una vez más, muchos de los poblados que anteriormente habían sido escenario del conflicto bélico (como Matiguás, Fantasma, Waslala, Wasaka, San Juan de Limay, Wiwilí, El Cuá, Yalí, El Ayote, Quilalí, El Jícaro, La Concordia, La Trinidad, Yolaina, Río Blanco...) volvieron a presenciar una espiral de violencia.

El panorama que se dibujó entonces fue el de un círculo vicioso de incompreensión; de acusaciones mutuas de incumplimiento entre el gobierno y los colectivos rearmados; de ajustes de cuentas entre desmovilizados; y de negociaciones interminables. De dichas negociaciones surgieron nuevos «rearmes» como estrategia de los grupos rearmados para presionar y obtener beneficios; y nuevos «desarmes» y acuerdos *ad hoc* como estrategia coyuntural del Estado para acallar la agitación en el campo.

De esta forma se empezó a observar en el campo la gestación -y posterior expansión- de un fenómeno de violencia anómica, donde los conflictos anteriormente basados en un discurso y una simbología política fueron diluyéndose en un magma de acciones que tenían poco que ver con posicionamientos político-ideológicos. Así, comenzaron a quebrarse los actores político-militares que antes se habían caracterizado por su solidez, y se observó la aparición de alianzas pasajeras en las que los colectivos antiguamente

enfrentados se unían ahora para luchar contra la institucionalidad, tras la demanda de intereses comunes y cotidianos que daban poco margen a la ideología ola retórica. Así nacieron «bandas» armadas compuestas aleatoriamente por ex-contras y ex-sandinistas, bandas a las que el ingenio popular terminó apodándolas como *los revueltos*.

Los *rearmados* o una guerra sin galones

Desde entonces, la actividad de los «nuevos» colectivos armados se caracterizó por la adopción de prácticas y estilos cercanos al bandolerismo, donde los autores materiales de los hechos estaban más preocupados por sobrevivir y saldar diferencias personales que por «luchar contra el comunismo» o «crear el hombre nuevo». De la misma manera, los «impuestos de guerra» bajo la forma de extorsión, robos de ganado o café, ya no surgían en aras de financiar nuevas guerras, sino que se sustentaban en objetivos más prosaicos –como, por ejemplo, permitir el día a día de los guerrilleros transformados paulatinamente en desesperados, inadaptados y desarraigados. En ese sentido, durante la década de los 90 se fue observando que los integrantes de estas bandas eran, en su mayoría, campesinos empobrecidos y adolescentes que no habían tenido ningún especial protagonismo durante la guerra de los 80. Ambos colectivos, procedentes de áreas rurales y sin perspectivas de futuro, dan fe de la descomposición social en que se sumergieron diversas zonas del interior del país. Esta situación, que difícilmente puede solucionarse por la vía policial, es la que han denunciado una y otra vez diversos colectivos, organismos internacionales y miembros de la Iglesia Católica (entre quienes destacan los obispos de dichas regiones).

Fruto de lo expuesto fue la toma de fincas y cooperativas, así como secuestros y asesinatos de campesinos y productores. Precisamente por ello el área descrita se calificó desde inicios de los 90 como la *frontera del conflicto* –zona donde, según un estudio realizado por el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) en 1991, más del 50% de la población vivía en condiciones de pobreza extrema y que, durante la primera mitad de la década, el saldo de la acción armada fue la muerte violenta de una persona cada dos días, así como la subsiguiente inseguridad para llevar a cabo cualquier tipo de actividad social o económica.

Como consecuencia de lo expuesto, toda lealtad o referencia hacia una autoridad institucional en el área desapareció, creándose un vacío de poder del que surgieron, muchas veces, siniestros *señores de la guerra* que mantenían, en determinadas comarcas, su dominio del terror. Así, desapareció también un sistema de consignas y directrices antes impuestas por el EPS y la RN; y apareció un tipo de violencia donde la frontera de lo social, lo político y lo económico devino en algo sumamente borroso (Bataillón 1993, p. 32). Se trataba de un conflicto bastardo, sin laureles, anómico y confuso, que tenía sus bases en la supervivencia, la descomposición social, y la falta de perspectivas y esperanzas de quienes –durante toda una década– fueron movilizadas y armadas por unas elites que eran coroneles, generales y políticos que, desde 1987 habían iniciado

un proceso negociador (con la firma de los acuerdos de Esquipulas II) que no significó ningún progreso, sino justamente la prolongación de un angustioso horizonte de desarraigo, subordinación y desigualdades acrecentadas, culminando después con el desenlace político y económico de los 90, y que tuvo como producto un profundo sentimiento de frustración (Martí 1997a).

Alrededor de dicho saldo –la frustración– paradójicamente terminaron por coincidir tanto los colectivos rurales de las zonas del interior como aquellos amplios sectores urbanos y de la macro región del Pacífico que no tenían «un lugar bajo el sol». No deja de ser este un sorprendente desenlace teniendo en cuenta que, en esencia, fueron estos dos colectivos quienes se enfrentaron entre sí (unos defendiendo su única oportunidad –el proyecto revolucionario– de ser protagonistas del desarrollo de una sociedad más justa y más propia, y los otros como reacción ante ella, pues la modernización y transformación de la estructura tradicional del agro suponía la destrucción del mundo en el que se sustentaba su existencia) en una lucha encarnizada que el sarcasmo académico calificó de *baja intensidad*.

Pero, por otro lado, las elites que movilizaron a las masas durante los 80 –antes radicadas entre Managua y Miami–, ahora claman por la implantación de un clima de orden y estabilidad. En ese razonamiento las elites figuran como las portadoras del *progreso* –cuya meta es la inserción de Nicaragua en una economía globalizada–, en oposición a la *plebe* que, con sus manifestaciones, bandas, huelgas y asonadas, representan la *barbarie*. Ante este discurso –que casualmente coincide con el de sus homólogos que, hace siglo y medio se enzarzaron en la quimera del canal interoceánico e implementaron las reformas liberales que insertaron al país en el mercado internacional del café– cabría preguntarse si la *barbarie* que ellos denuncian es la constatación de la miseria en que está sumida la mayor parte de la población y el despertar de la conciencia de quienes la padecen.

El largo camino de la reconciliación en el campo

Sin embargo, también han ido surgiendo diversas expresiones que han dado lugar a cierto optimismo. Entre éstas destacan creativas coincidencias entre los campesinos que habían ejercido de *correos* o de colaboradores de la RN, los productores vinculados a la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG) –de adscripción sandinista– y los cooperativistas salidos del proceso revolucionario. En esta dirección, en una investigación realizada por el Centro para la Investigación y Promoción y el Desarrollo Rural y Social (Ciprés) se exponía (Núñez et al., p. 564):

En las regiones I y VI se han realizado encuentros entre desmovilizados de la Resistencia y cooperativistas donde se han manifestado actitudes maduras, sinceras, abiertas y de reconciliación. ... Ambos colectivos tienen conciencia de la problemática que están viviendo.... No ha habido reclamos por ninguna de las partes en cuanto a lo sucedido durante la guerra, más bien han ido cediendo espacios al interior de las cooperativas para minimizar el conflicto de la tierra.

En pequeñas poblaciones rurales otrora golpeadas por la guerra, estos colectivos empezaron a *reconstruir* sus comunidades a partir de la percepción de que entre ellos existía mucho más en común que con quienes anteriormente los enfrentaron y comandaron desde Managua o Miami. Sobre esta idea, y a partir de cuestiones tan cotidianas como la reconstrucción de los círculos de compraventa de bienes de consumo básico entre los pobladores, la organización de liguillas comarcales de béisbol, o la apertura de locales donde se concentran los vecinos de la comunidad para celebrar las festividades, empezó la esperanza de recomponer el *país campesino*. Y es precisamente por eso que podemos comprender declaraciones y comentarios como los siguientes, donde se enfatizan las coincidencias que existen entre dichos colectivos y las divergencias de éstos con sus ex-jefes:

Nos inculcaron que ellos eran comunistas y a ellos les enseñaron que nosotros éramos contrarrevolucionarios, y ninguna de las dos cosas era verdad.⁵

Mirá hombre, a los ricos no les importa si los afectados son ustedes o nosotros, porque todos nosotros somos *palmados*. Aquí la cosa está entre los ricos y nosotros, los *chapiollos*. Entonces tratemos de ver cómo nos defendemos ... y establezcamos una coordinación para que nos ayudemos si alguno de nosotros lo necesita.⁶

Hay que ser honrados... no siempre se entendió que la contrarrevolución había creado su base social en el campo... la gente de la RN con que hablé *ahorita* son campesinos, incluso encontré productores que fueron amigos míos en los años 70.... Ahora no tienen dinero, ropa, zapatos ... y sólo *hacen un tiempo* de comida ... los enclaves están verdaderamente en una situación dramática.... En medio de todo esto muchas veces han sido los mismos cooperativistas, tantas veces víctimas de la acción guerrillera, los que han estado compartiendo con ellos lo poco que tienen.⁷

Diez años de guerra fueron más que suficiente. Ahora tenemos que entendernos y empezar a producir.... Hay que destacar algo importante: por primera vez en la historia de Nicaragua, los sectores antes confrontados se quedan y tienen derecho a vivir en el país. Tenemos que entendernos.⁸

Antes no me atrevía a cruzar el río. Más allá del Cerro de Cantagallo le podían caer los contras. Nunca iba a la comunidad vecina. ... Nos mirábamos mal.... Ahora es diferente, los recelos entre nosotros van desapareciendo.... Nos necesitamos para sacar adelante nuestro *tuquito* de tierra.⁹

De estos comentarios se desprende el surgimiento de dinámicas que han ido vinculando de forma pacífica y creativa a los miembros de los colectivos antes enfrentados. De dichas dinámicas ha empezado a surgir un nuevo fenómeno que podríamos calificar como (en oposición a los pactos intra-elitescos que se desarrollaron a partir de Esquipulas y las elecciones de 1990) la *reconciliación*

⁵ Extraído de una entrevista realizada a Carlos García, presidente de la Fundación de Ex-Combatientes de Guerra, donde se agrupan ex-miembros del EPS, el MINT y la RN.

⁶ Extraído de una entrevista al coordinador político del FSLN en Juigalpa.

⁷ Extraído de una entrevista a Daniel Núñez, director de la UNAG, en *Barricada*, 30/7/90.

⁸ Extraído de una entrevista a Frankiin –ex-dirigente contra– en *Barricada*, N° 334, 1991.

⁹ Testimonio obtenido en el trabajo de campo de un miembro de una ex-Cooperativa de Autodefensa (CAD), ubicada en una comarca oriental de Condega donde, más allá del río –que dividía la zona seca de la húmeda– era territorio de la Contra.

desde abajo. Reconciliación que, sin embargo, tiene que enfrentar muchos obstáculos, entre los que destacan la capacidad de hacer frente a la violencia generada por las medidas exclusivistas y polarizantes del capitalismo tardío.

A modo de epílogo: ¿cómo superar la violencia?

Tal como hemos expuesto, el recrudescimiento de la vida cotidiana fue quebrando –sobre todo desde finales de los 80– las esferas que separaban lo privado de lo público. La profunda crisis económica, los despidos masivos de empleados públicos y los drásticos recortes de los servicios sociales supuso que las decisiones tomadas en el ámbito público irrumpieran con fuerza en el ámbito de lo doméstico, impulsando una activación de actores sociales que anteriormente se habían manifestado de forma subordinada a otros protagonistas de la acción colectiva. Esta «politización» de la vida privada implicó una redefinición de las relaciones entre la esfera de lo público y lo privado (Ozlak), creando una renovada capacidad de expresión de ciertos sujetos sociales –los llamados ‘nuevos sujetos sociales’– antes sujetos a lógicas políticas partidarias.

En la década previa, con la Revolución Sandinista, el conflicto político otorgó a esos actores visibilidad social por primera vez en la historia. La movilización de dichos actores –muchas veces de forma dependiente o canalizada a favor o en contra de la revolución– dio como fruto un incremento de su sentimiento de eficacia política, aumentando la confianza en la organización y dándoles conocimiento de las ventajas derivadas de trabajar y presionar unidos. En este sentido cabe interpretar las declaraciones de dos mujeres que, como botón de muestra, nos señalan la nueva actitud de muchos nicaragüenses ante la realidad:

Antes de la Revolución yo era incapaz de abrir la boca. Me daba miedo. Tenía horror a hablar en público, ahora no, me defiendo.¹⁰

Cuando la Guardia, quien alzaba la voz era hombre muerto... No querían que uno hablara. ... Ahorita esto ha cambiado. Nos costó un *cahimbo*. A mí me mataron el marido y un hijo en la guerra. ... Pero aprendimos a *arrecharnos*, a hablar... ¡y a decir no!.¹¹

Y es precisamente desde esta perspectiva que cabe introducir en Nicaragua una variante clave en la vida política: una cultura política *movilizadora* y *combativa* fruto del periodo revolucionario y su consiguiente reacción –periodo que a pesar de sus limitaciones y errores, impactó en el imaginario de numerosos colectivos sociales que ahora no se resignan a la pasividad ante los embates neoliberales dictados desde el ejecutivo.

En este sentido cabe también observar que los procesos de apertura, democratización y modernización institucional acaecidos en Nicaragua presentan

¹⁰ Declaración de una trabajadora de la ex-empresa estatal El Caracol.

¹¹ Extraído de una conversación con una abuelita del asentamiento rural llamado Venecia, en el municipio de Condega, donde me alojaron durante varios días para poder llevar a cabo parte del trabajo de campo.

notables claroscuros. Muestra de ello es que los discursos a favor de la libre competencia y de la desregulación coexisten con el mantenimiento de prácticas corporativas y estilos clientelares; que la retórica de la reforma del Estado convive con la manipulación de los presupuestos gubernamentales que alimentan lealtades políticas.

A pesar de la titularidad abstracta de derechos y capacidades individuales rubricadas en los textos legislativos y en la Carta Magna (a partir de los cuales la democracia basa su legitimidad), en Nicaragua, contar con *parientes*, conocer a *alguien* en el gobierno, tener *buenos* amigos, ser de *buena familia*, continúan constituyendo los activos más importantes para progresar en la esfera pública y privada. De esta manera, si bien existen múltiples centros de estudio que difunden «modernas» ideologías que exaltan valores como los de ciudadanía, democracia representativa y libre mercado, en la vida cotidiana persiste la reproducción de pautas clientelares y dinámicas de solidaridades primarias basadas en la renta, la familia, el compadrazgo, la amistad o el color de la piel (Vilas).

Es difícil observar la eficacia de las instituciones democrático-representativas en la mejora de las condiciones de vida de las amplias mayorías. Y es este tipo de reduccionismo democrático el que no solo pone en cuestión la competitividad efectiva de los procesos electorales y la confección de la agenda que se discute en ellos, sino que también perpetúa situaciones –entre elección y elección– donde imperan la impunidad, la corrupción pública, la opacidad administrativa y la subordinación del poder judicial al Ejecutivo. Efectivamente, la democratización es muy difícil si no va acompañada de una democratización de la sociedad y de una reducción de las profundas fracturas económicas y culturales que hoy cruzan muchos países latinoamericanos (dentro de los que se sitúa Nicaragua). La democracia es un *régimen de integración* en torno a valores y actitudes compartidas; y la concertación política es una quimera cuando el mercado margina, la cultura discrimina y el Estado abandona. Sin embargo, cabe puntualizar que la evolución de este panorama dependerá también de la capacidad de las fuerzas populares para plantear mejores estrategias de desarrollo que compatibilicen el crecimiento, la democracia y la equidad; así como de la creación de formas organizadas de acción colectiva que se orienten al ejercicio directo e indirecto del poder. Así, como expone Castañeda, el paisaje político venidero estará en función de la efectividad del movimiento popular (independiente de sus adscripciones políticas) en encontrar fórmulas que impulsen una mayor justicia social y una mayor representatividad. Y ello, inevitablemente, tiene que ver con la lucha, pero también con la creatividad y la imaginación (Martí 1998).

Y esa imaginación es necesaria para romper los círculos concéntricos de la violencia multiforme que aparece en la geografía cotidiana de Nicaragua. No solo se trata de desarmar a las bandas, sino también de integrar sus componentes en una sociedad que ofrezca más oportunidades, más atención y más humanidad. Porque también es violencia la exclusión, el hambre, la falta de expectativas y el desprecio.

Referencias

- Bataillon, G.: «Contras y recontras nicaragüenses: reflexiones sobre la acción armada y la construcción de actores político-militares», 1993, mimeo.
- Bataillon, G.: *Violence politique en Amérique Centrale. Essai sur la mise en place de la guerre civile nicaraguayenne et des affrontements armes au Guatemala et au Salvador*, tesis doctoral Ehess, París, 1996.
- Bendaña, C.: *La tragedia campesina*, CEI, Managua, 1991.
- Castañeda, J.: *The Utopia Unarmed*, Vintage, Nueva York, 1993.
- CIAV-OEA: *Informe de desmovilización durante 1990*, CIAV, Managua, 1991.
- CIAV-OEA: *La frontera del conflicto*, CIAV, Managua, 1995.
- Cuadra, E. y A. Saldomando: *Los problemas de la pacificación en Nicaragua. Recomposición de grupos armados y conflictos sociales*, Cries, Managua, 1994.
- Martí, S.: *Revoluciones, rebeliones y asonadas. Transformación social y violencia política en Nicaragua, 1961-1993*, tesis doctoral, UAB, Barcelona, 1997a.
- Martí, S.: *La revolución enredada. Nicaragua 1977-1996*, Libros de la Catarata, Madrid, 1997b.
- Martí, S.: «La izquierda en América Central: ¿Renacimiento o debacle?» en Cardenal y Martí (comps.): *América Central: Las democracias inciertas*, Tecnos, Madrid, 1998.
- Núñez, O. et al.: *La guerra en Nicaragua*, Ciprés, Managua, 1991.
- Serra, L. y D. Barry: *Refugiados, repatriados y población desplazada*, Cries, Managua, 1989.
- Vilas, C.: «La visión de los científicos sociales» en *Nueva Sociedad* N° 139, 1995, pp. 159-161.